BRASIL

LOS MILITARES EN EL PODER

...CONTRA LOS OBREROS

52

MAS 7475
10 (88-92)

INTRODUCCION

Los folletos incluidos en esta publicación son documentos que tuvieron enorme repercusión política en el Brasil por la gran cantidad de datos que proporcionan a todos los que se preocupan por saber lo que realmente ocurre en ese país, hoy bajo el yugo de una de las más salvajes y feroces dictaduras que ha conocido la historia de la humanidad.

La dictadura militar brasilera viene montando una poderosa máquina de propaganda, por medio de la cual procura crear una imagen favorable para sí y para la nación, tanto interna como —y principalmente— externamente. Pero, su propaganda, por más grandiosa y dispendiosa que sea, no resiste a la fuerza de los argumentos fundados en hechos objetivos de la realidad brasilera.

El tan propalado progreso económico brasilero queda reducido a sus verdaderas dimensiones cuando se comprende el grado de explotación a que están sometidas las clases trabajadoras y el bajo nivel de vida que le es impuesto por la política económico-financiera de la dictadura militar. Una frase utilizada por el general-dictador Garrastazú Médici explica y sintetiza la situación: "la economía va bien, pero el pueblo va mal".

Indiscutiblemente no se puede llamar desarrollo nacional real al proceso de entrega acelerada de las riquezas del país a los trusts extranjeros, el endeudamiento creciente del Brasil, la expansión del latifundio, acompañado por la concentración de la riqueza en manos de un número cada vez menor de grandes propietarios rurales, industriales, banqueros,

40587

comerciantes y exportadores —algunos nacionales, pero en su gran mayoría extranjeros— mientras la inmensa mayoría de la población vive en la más abyecta miseria. Se trata de un desarrollo deformado que acentúa la dominación imperialista, aumenta el predominio del latifundio y hace aún más dura la vida ya difícil de las masas trabajadoras.

Otro tema importante de la llamada propaganda oficial de la dictadura es el combate a la corrupción. El asunto es realmente apasionante. Fue, incluso, una de las principales "banderas" del golpe militar de 1964. Pasados ya 8 años de la instauración de la dictadura "moralizadora", lo único que se ve es la más descarada carrera de los "honestos" militares tras los cargos públicos, funciones en empresas estatales o mixtas, o aún en las compañías privadas, en especial las pertenecientes a los grupos imperialistas; carrera esa acompañada de los más vergonzosos negociados. Nunca fue tan grande el llamado "tráfico del poder". Basta vestir un uniforme militar y tener algún galón o charretera para poseer "poder" y conseguir todo para sí y para sus amigos y protegidos. ¿Qué es eso, sino la forma más clara y abierta de corrupción administrativa? El documento que analiza la actividad de los militares en el Poder proporciona datos abundantes e irrespondibles al respecto.

Por lo tanto, queda bastante claro el porqué de la represión violenta contra el pueblo y la censura fascista que los militares imponen en el Brasil. Su objetivo es impedir las luchas populares contra la explotación a que está sometida la mayoría de la Nación y encubrir sus actos entreguistas y antinacionales.

Pero, no hay terror suficientemente fuerte, capaz de hacer callar a los verdaderos patriotas y demócratas. Publicaciones como éstas prestan un gran servicio no solamente al pueblo brasilero, sino también a todos los pueblos que directa o indirectamente se encuentran amenazados de llegar a ser sometidos a tal tipo de gobierno militar-fascista.

Creemos que la difusión de estos trabajos de denuncia de los militares brasileros es una contribución a la lucha nacional y democrática de los pueblos de todo el mundo.

ANTONIO TAVARES

LOS MILITARES EN EL PODER

El Brasil es hoy un país bajo la tutela de los militares. En todas partes se hace sentir la presencia nefasta de los generales, almirantes, brigadieres y otros grados menores que hacen y deshacen en las más importantes esferas de la vida social, como si fueran dueños de la nación. A partir de 1964, cuando fue consumado el golpe fascista, el pueblo brasileño está sometido a una dictadura odiosa y sanguinaria, vive más humillado, oprimido y explotado.

Los hombres de uniforme implantaron en Brasil la forma más retrógrada de gobierno desde la Independencia. Ejecutan una política abierta de entrega del país a los monopolistas extranjeros. Sus medidas defienden invariablemente los intereses de los patrones mientras mantienen bajo severa vigilancia a los trabajadores de las ciudades y del campo, reprimiendo salvajemente cualquier manifestación de disconformidad. Liquidaron todas las libertades y a través del "Ato Institucional Nº 5" (1), impusieron por la vio-

(1) Los "Atos Institucionais" son el medio encontrado por los militares en Brasil para institucionalizar sus actos criminales que entran en contradicción, incluso, con la Constitución y las leyes establecidas por ellos mismos. Los tres "Atos Institucionais" fundamentales fueron el Nº 1 —impuesto luego después del golpe militar en 1964— el Nº 2 —promulgado en noviembre de 1965— y el Nº 5, del 13 de diciembre de 1968. Por medio del Ato Nº 1 los militares se otorgaron el derecho de quitar los mandatos de parlamentarios, intendentes municipales y gobernadores estaduales (8), exonerar del servicio público y de las Fuerzas Armadas todos los que se oponían a la dictadura militar. El Ato Nº 2 fue promulgado luego de una derrota electoral de la dictadura en las elecciones para gobernadores de los Estados; por este Ato fueron disueltos los partidos políticos existentes en el país e impuesto el bi-partidarismo, habiendo sido formados la Alianza Renovadora Nacional (ARENA) y el Movimiento Democrático Brasilero (MDB).

lencia de las armas, un régimen absolutista que indiscriminadamente encarcela, tortura y asesina a patriotas y demócratas.

Bajo la actual dictadura, los militares pasaron a constituir una élite privilegiada que se coloca por encima del común de los mortales. Acabaron con la paridad de remuneraciones para los funcionarios civiles de la Unión y elevaron sus sueldos y gratificaciones a niveles altísimos. Se valen de sus puestos para asaltar el erario de la Nación o para hacer negociados. El tráfico de las influencias se realiza de la manera más vergonzosa. La corrupción administrativa se extiende cada vez más. Y los militares todavía tienen el cinismo y la arrogancia de proclamarse salvadores de la patria. Pero los hechos muestran en qué consiste el "patriotismo" de los generales. Ocupando puestos de la administración pública o de empresas privadas, generales y coroneles se enriquecen de la noche a la mañana. Y para encubrir sus actos vergonzosos, impiden a través de férrea censura de prensa la divulgación de sus canalladas.

MILITARES EN LA ADMINISTRACION FEDERAL

Oficiales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas retienen en sus manos casi todos los puestos de la administración pública. De gobierno en gobierno, los militares van extendiendo su control sobre el aparato de Estado. Como una plaga de langostas avanzan en bandadas hacia los cargos civiles. En el gobierno del mariscal Castelo Branco acapararon numerosos e importantes cargos de la administración civil. Durante el gobierno de Costa e Silva, a imagen y semejanza de sus Ministerios con mayoría de los militares, según estadísticas publicadas en la prensa, 150 oficia-

El Ato Institucional Nº 5 (AI—5) fue impuesto por la dictadura como un instrumento fascista que le permitiera enfrentar el creciente movimiento de oposición popular que se había extendido por todo el país durante el año de 1968; por su intermedio la dictadura cerró el Parlamento Federal, las Asambleas Legislativas estaduales y Cámaras de ediles municipales, quitó nuevos mandatos de parlamentarios, gobernadores e intendentes; abolió el derecho al "habeas corpus", acabó con la inamovilidad y estabilidad de los miembros del Poder Judicial, etc.

les ocupaban puestos administrativos. "Tal número —señalaba un diario de Rio de Janeiro— constituye un record absoluto en la historia del Brasil...". Pero el record fue batido por el gobierno del general Garrastazú Médici, que tiene como vicepresidente al almirante Augusto Rademaker. El actual dictador mantuvo a casi todos los militares en los cargos que ocupaban en la administración anterior. Y nombró otra hornada para nuevos puestos. En su Ministerio continúa el coronel Mario Andreazza, con las mismas funciones que desempeñó en la administración de Costa e Silva: Ministro de Transportes y controlador de la "cajita" (2) para la cual contribuyen obligatoriamente los "felices" concesionarios de "Obras Públicas". Passarinho (3) voló con todo su equipo para el Ministerio de Educación y Cultura. En el Ministerio de Comunicaciones quien da las cartas es el coronel Higino Corsetti, mientras que el coronel Costa Cavalcanti pasó al Ministerio del Interior.

En todos los Ministerios la dictadura creó secciones de Seguridad e Informaciones. Estas secciones fueron enormemente reforzadas para dar cumplimiento al decreto de Médici que obliga a todos los órganos públicos a prestar cuentas al Servicio Nacional de Informaciones, actualmente dirigido por el general Carlos Alberto Fontoura. Se abrieron así, en todo el servicio público nuevas oportunidades para el aprovechamiento de militares en funciones de espionaje y represión. La medida contribuye para agravar el clima de terror existente en las reparticiones públicas y para estimular el régimen de delaciones que se introdujo a partir del golpe de abril de 1964. En la jefatura de estas redes de espionaje, en los Ministerios, están los oficiales-generales. El brigadier Armando Tróia, por ejemplo, que ejercía el cargo de director de seguridad del Ministerio del Tra-

(2) Nombre jocoso que se da en Brasil al sistema de coima imperante en la administración pública, desde el más bajo funcionario hasta el Presidente de la República; "cajita" sería el recipiente donde todos depositarían su coima...

(3) "Passarinho", que traducido al castellano significa "Pajarito", es el apellido del ex ministro del Trabajo (durante el gobierno del mariscal Costa e Silva) y actual ministro de la Educación.

bajo, acompañó a Passarinho y pasó a ocupar un cargo idéntico en el Ministerio de Educación y Cultura, donde sustituyó al general Turola. Es interesante señalar que la carrera del Brigadier Tróia en cargos civiles continúa y asumió extraños rumbos: recientemente fue nombrado para la presidencia del Instituto Nacional del Cine, subordinado al MEC (Ministerio de Educación y Cultura).

En los cargos que ocupan los militares introducen el sistema de los "ahijados", simple prolongación del régimen de los "favoritos" ampliamente adoptado y admitido en el cuartel. Para que le ayuden, traen a sus amigos de cuartel, formándose una verdadera pirámide en cuyo vértice está, naturalmente, el general presidente. Así, pululan militares en las distintas reparticiones y organismos autónomos subordinados a los Ministerios. En el MEC, el coronel Newton Barreira es el jefe de gabinete, cabiendo al coronel Eric Tinoco Márques la dirección del Departamento de Educación Física. El Proyecto Rondon (4) es comandado por un militar, el coronel Sergio Pasquale. El coronel Augusto César de Sa da Rocha Maia, manda el gabinete del Ministerio de Transportes. En el Ministerio del Trabajo, se encarga de la Secretaría de la Asistencia Médico-Social el brigadier médico Wilson de Oliveira Freitas. Se ocupa de la Dirección del Servicio de Relaciones Públicas del Ministerio de Comunicaciones el mayor Rodrigo Otávio.

La SUDENE (Superintendencia de Desarrollo del Nordeste) órgano creado para realizar algunas reformas en el Nordeste, con el fin de encubrir sus lacras más flagrantes, está subordinada al Ministerio del Interior. A partir de 1964 solamente tuvo generales en su dirección. Se volvió feudo de los militares y entró en completa decadencia, con la purga o la evasión de innumerables técnicos. Por la SUDENE, des-

(4) Se trata de una "Operación" organizada por el Ejército que consiste en el envío de estudiantes para las áreas atrasadas en el interior del país, durante los meses de vacaciones, con el objeto de que realizaran un trabajo asistencial y dieran una imagen mejor de la dictadura. Es un intento demagógico de la dictadura de mostrarse preocupada con la miseria y el sufrimiento de las poblaciones del interior del país, llevando a cabo algunos paliativos, pero sin atacar los problemas fundamentales.

de el golpe de abril, pasaron el general Euler Bentes Monteiro, el general Tácito Teófilo de Oliveira y su actual superintendente, el general Evandro de Souza Lima. El general Tácito fue el mismo que dijo durante la última sequía del Nordeste que estaban los flagelados (5) ganando muy bien en los "frentes de trabajo" (6) —2 cruzeiros por día— mientras que sólo la gratificación atribuida al cargo de superintendente de la SUDENE es de Cr$ 2.139,00.

A ejemplo de la SUDENE, casi todos los órganos regionales subordinados a los Ministerios son dirigidos por militares. En la SUDAM (Superintendencia de Desarrollo de la Amazonia) quien da las órdenes es el general Bandeira Coelho. El coronel Wilson Santa Cruz Caldas está al frente de la SUVALE (Superintendencia del Valle del (río) San Francisco).

En el Consejo Nacional del Petróleo quien manda es el general Araquén de Oliveira. Otro Araquén —Rolin Pinheiros—, también general, es el director general del Departamento Nacional de Telecomunicaciones. El Servicio de Combustibles Sólidos tiene como director al general Francisco Soares. En el Departamento Nacional de Puertos y Vías Navegables, el comandante Tanen Boghossian ejerce el cargo de director general. El coronel Strayo Sava es el Superintendente de la Administración del Puerto de Río de Janeiro. Como superintendente también, el comandante Carlos Cordeiro de Melo dirige la Marina Mercante. Hasta la Oficina de Meteorología de Brasilia está encabezada por un ofi

(5) Se denomina así a los campesinos del Nordeste que, para poder sobrevivir, abandonan sus tierras durante los periodos de mayor sequía, desplazándose hacia el litoral u otras regiones.

(6) Para impedir la radicalización de esa inmensa masa campesina que durante las épocas de sequía quedaba sin medios de subsistencia, el gobierno acostumbraba crear "Frentes de Trabajo" que absorbían parte de esa mano de obra desocupada en obras públicas (construcción de carreteras, tranques, etc.). Pero, durante la sequía de 1971, frente a la lucha campesina, que asumió proporciones hasta entonces desconocidas, la dictadura militar se vio obligada a crear "frentes de trabajo" en gran escala —algunos hasta con 30 mil personas— que llegaron a dar ocupación a cerca de 500 mil campesinos.

cial superior, el coronel-aviador Roberto Venerando Pereira.

No se puede decir que el dominio de los generales sea dulce para el pueblo brasileño. Muy por el contrario. Esto no impide que un general sea el presidente del Instituto del Azúcar y del Alcohol. Efectivamente dirige esta institución tan disputada por los dueños de ingenios azucareros paulistas y nordestinos el general Alvaro Tavares do Carmo.

La carestía de la vida crece sin cesar. Los propios datos falsificados del gobierno admiten este hecho, además sabido por todo el pueblo. Lo que no todos saben es que el órgano encargado de fiscalizar el precio de los productos es totalmente controlado por militares. En noviembre de 1969, asumió la presidencia de la SUNAB (Superintendencia Nacional de Abastecimiento) el general Glauco Carvalho. Sus auxiliares son entre otros, el coronel de caballería Oscar Paranhos, en el cargo de secretario general; el general Alberto Assunção, como jefe del sector de productos de carne; el general Virgilio Gama Lobo, en el control de precios en la enseñanza. El general Darci Noel es el jefe del Servicio de Informaciones y Seguridad; y existen todavía más generales y coroneles para los puestos de delegados en los Estados.

Y, como estamos en la época de las comilonas —aunque los tiempos sean sombríos para el pueblo— dirige la Campaña Nacional de Alimentación Escolar el general José Sombra. En la COBAL (Compañía Brasileña de Alimentación) pontifica el general Teotonio Vasconcelos.

El recién nacido Instituto Nacional de Propiedad Industrial está subordinado al Ministerio de Industria y Comercio. Trata de patentes industriales, área extremadamente especializada de conocimientos técnicos y jurídicos. En el fue impuesto un capitán de fragata, Thomaz Thedim Lobo.

Ni las calamidades públicas que constituyen tragedia para las capas pobres dejan de servir para la creación de cargos para los militares. El Grupo Especial de Asistencia a las Calamidades Públicas, subordinado al Ministerio del Interior, tiene como coordinador al general Luis Mendes da Silva. Para combatir la contaminación del aire provocada

por vehículos automotrices, el Consejo Nacional de Tránsito creó un Grupo de Trabajo que es presidido por el general Hélio de Miranda Costa Moreira. Ya se comienza a decir que, con la presencia militar también en ese sector, el aire se volvió todavía más irrespirable.

Decididamente los militares no están allí para facilitarles la vida a los brasileños, sean civilizados o indígenas. Así es que, al asumir el puesto de presidente de la Fundación Nacional del Indio, la tristemente famosa FUNAI, el general Oscar Jerônimo Bandeira de Melo declaró: "Como soldado, la misión a mí confiada será cabalmente cumplida. Aunaremos esfuerzos para tratar a los indios como personas humanas, lo que realmente son..." El inteligente general parecía así haber aclarado sus propias dudas respecto a la naturaleza de los indios. Lo que no le impide expulsarlos, sin mediar palabras, de las tierras por donde debe pasar la carretera Transamazónica, indiferente a las protestas que se sumaron en todo el mundo contra la política gubernamental en relación al selvícola. En la Fundación que dirige, el general Bandeira de Melo ha tenido sus contratiempos. Hace poco, fue arrestado un sargento en retiro de la Marina que, sabedor de las regalías de los oficiales superiores, se hacía pasar por almirante. Sólo fue descubierto después de que el presidente de la FUNAI lo hubo designado jefe de seguridad.

Las FF. AA. se esmeran en las funciones de policía. Nada hay de extraño, por lo tanto, que el Departamento de Policía Federal, subordinado al Ministerio de Justicia, sea dirigido por militares. Es comandado, actualmente, por el general Cánepa. Las comisarías de la policía federal en los Estados son ocupadas por militares.

Los militares son insaciables. En los puestos que ocupan, manipulan presupuestos de billones y billones de cruzeiros y realizan sucios negociados. Se puede afirmar que, en todos los negocios sucios que se realizan en el país, están involucrados militares congraciados por los favores oficiales. Y todavía tienen el desplante de continuar investigando la corrupción que existió en gran escala en los gobiernos anteriores. Mantienen en funcionamiento, en todos los Estados, las Comisiones Generales de Investigación. Pe-

ro, prudentemente, mantienen silencio sobre la corrupción actual, ciertamente apoyados en la inteligente deducción del mariscal Costa e Silva (5): la corrupción es inherente a la persona humana. Aún así, algunos casos acaban siendo públicos. Debido al juicio de un **Habeas Corpus**, por ejemplo, se supo que el teniente coronel Clayde Macrini Leite estafó Cr$ 150 mil de su unidad. Otro caso fue publicado por el "Jornal do Brasil" (11-II-71), confirmando que el general Morency do Couto e Silva, hermano del jefe del SNI (Servicio Nacional de Informaciones), general Golbery, fue citado como uno de los involucrados en la estafa de un millón de cruzeiros de una firma con sede en Río.

Según el relatorio-denuncia hecho por el Sindicato de los Radialistas de Guanabara, transcrito por "O Estado de Sao Paulo" (8-X-71), el coronel Newton Leitão, cuando pertenecía al cuadro administrativo de la Red Excelsior de Televisión, participó sin escrúpulos en los golpes financieros: "retiraba de 15 a 20 millones antiguos (cruzeiro viejo) por semana". Tampoco es secreto para nadie que, en la Zona Libre de Manaus, comandada por el general Floriano Pacheco, son innumerables los casos de contrabando de mercancías extranjeras llevados a cabo, principalmente por oficiales de la Aeronáutica. A propósito, merece ser recordado que era en la Zona Libre de Manaus que el senador arenista (7) por el Amazonas, José Esteves, iba a conseguir aparatos electrodomésticos y pantalones "Lee" americanos, para regalar a sus amigos a cambio de la asignación de presupuestos en el Ministerio de Educación. Entre los distintos militares favorecidos está el coronel Eduardo Casares, además de políticos estrechamente ligados al área militar.

En materia de empréstitos normales los militares tienen una serie de ventajas. A fines de 1970, la Caja Económica Federal, estableció el límite de sus empréstitos a consignación: Cr$ 4.000 para los militares y Cr$ 2.000 para funcionarios civiles. Quedó así aritméticamente demostrado que un militar vale el doble de un civil. La explicación pa-

(7) Arenista, partidario de la Alianza Renovadora Nacional (ARENA), partido formado por los militares para representar políticamente la dictadura.

ra esta anomalía está, entre otras cosas, en las presidencias de la Caja Económica en los diversos Estados, ejercidas en gran parte por galonados: en Guanabara, Almirante José Joaquín Gomes Fontenelle; en Pernambuco, General Manuel Pais; en Piauí, General Gaioso e Almendra, entre otros.

MILITARES EN LAS ADMINISTRACIONES ESTADUALES (8) Y MUNICIPALES

En la gestión de Médici, el aparato gubernamental sufrió un rudo proceso de centralización. La autonomía de los Estados desapareció. El gobierno quiere tener bajo su vista y bajo su control todos los aspectos de la vida administrativa del país, incluso en escala "estadual" (provincial) y municipal. Los secretarios de Seguridad Pública son oficiales del Ejército, designados por el gobierno central que todavía controla a las policías militares estaduales a través de una Inspectoría subordinada al Ministerio del Ejército (9). Los puestos de comando de las milicias estaduales y la mayoría de los cargos de dirección de las policías civiles también son ocupados por oficiales de las FF. AA. En Guanabara, por ejemplo, el general Antonio Nascimento es el Secretario de Seguridad; el general Ovidio Neiva es su jefe de gabinete; el brigadier Francisco Bacha es asesor del secretario; en la Superintendencia de la Policía de Seguridad está el general Gentil João Barbato; el general Afonso Emilio Sarmento es el Superintendente de la Administración de Servicios; el coronel Gastão Barbosa Fernándes dirige el DOPS (10); el general Pires de Castro comanda

(8) Estaduais, estaduales —se refiere a los Estados, división administrativa de la nación que en algunos países latinoamericanos correspondería a las provincias.

(9) En Brasil existen tres Ministerios Militares: Ministerio del Ejército (fuerzas terrestres), Ministerio de Aeronáutica y Ministerio de la Marina. Son coordenados por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (EMFA) a nivel militar.

(10) Departamento de Orden Político y Social, órgano de la policía encargado de combatir toda y cualquiera oposición política al gobierno. Fue creado en la época de la dictadura de Getulio Vargas inspirado en la GESTAPO de Hitler.

el departamento de operaciones; el general Altamiro Viveiros Paiva comanda el Departamento de Control y Seguridad.

En las administraciones exclusivamente dependientes del gobierno central los militares están naturalmente presentes. El coronel Hélio Prates da Silveira es el Gobernador de Brasilia. Su Secretario de la Educación es un general. Con la ampliación de lo que los militares denominan área de seguridad nacional, innumerables municipios perdieron su autonomía. Sus intendentes son nombrados por los gobernadores estaduales que son simplemente instrumentos del gobierno federal. Prácticamente todos los interventores nombrados para esos municipios son militares. El general Bandeira Brasil es el interventor en la ciudad portuaria de Santos. Uno de su primeros actos al tomar posesión fue aumentar su propio sueldo y colocar a su hijo como secretario de turismo del municipio. El general Carlos Marciano Medeiros, salido de otro planeta, pues había sido presidente del Banco del Estado de Espírito Santo y director de empresas privadas es el interventor en Duque de Caxias. En Angra dos Reis está el Almirante Jair Toscano de Brito. En Foz do Iguazú, el coronel José Carlos Toledo; en Salvador el capitán de Fragata, Paulo Ribeiro de Almeida; en São José dos Campos el brigadier Sergio Sobral de Oliveira; en Itu, el general João Paulo da Rocha Fragoso; en Araras, el coronel Teodoro de Almeida Pupo; en Sobradinho, el teniente coronel Sergio Lopes Novais. Sólo en el Estado de Río Grande do Sul son 24 los municipios incluidos en el área de seguridad nacional. De los interventores nombrados, la mayoría está constituida por militares.

Los gobernadores de los Estados fueron "elegidos" por las Asambleas Legislativas por imposición directa del presidente de la República. Entre los escogidos, varios son militares. En el Amazonas, está el coronel João Walter de Andrade, ex superintendente de la SUDAM. Gobierna Ceará el coronel César Cals. Para Río Grande do Sul fue indicado el coronel Euclides Triches. El vice-gobernador de Maranhão es el general Artur Sá Colares.

El Estado de Guanabara está dirigido por un civil supuestamente de oposición. Pero el gobernador Chagas Frei-

tas está “bien asesorado” por oficiales superiores. El secretario de los Servicios Públicos de Guanabara es el comandante Adhyr Velloso de Alburquerque. El Departamento de Tránsito está encabezado por el brigadier Hermes de Gama Almeida, quien sustituyó al comandante Celso Franco. El mayor Aldemir da Costa Pereira es el director de la División de Control del DETRAN (Departamento de Tránsito) carioca. En la Compañía Estadual de Teléfonos está como presidente, el general José Antonio de Alencastro e Silva, que es diligentemente auxiliado por el coronel Hélio Gomes do Amaral, director administrativo, y otros. La Fundación de los Terminales Rodoviarios (transporte por tierra) y Estacionamientos, está comandada por el brigadier Ascendino D'Avila Melo. El Superintendente de Transportes del Estado de Guanabara es el capitán de fragata Edson Costa Matos. El coronel Paulo Leitão de Almeida es el presidente de la Compañía Estadual de Gas. Este coronel, en el gobierno anterior, además de ese cargo ejercía también la presidencia de la Comisión Estadual de Energía Eléctrica. En el antiguo Distrito Federal (Guanabara), como se ve, la práctica viene de antes. En el gobierno Negrão de Lima, ya estaba en la Compañía del Subterráneo (Metro), el general Nilton Mendes Gonçalves, que continúa en el cargo. Cabe señalar que en el primer año de actividades, para construir 60 metros de galerías de concreto en los 420 metros de túnel perforado, se gastó, según él mismo informa, 25 millones de marcos alemanes, 142 millones de cruzeiros y 2 millones de dólares de un financiamiento de 10 millones. Es mucho dinero para tan poca obra. No es en balde que se habla de robo de presupuestos.

Mostrando predilección por los transportes, los militares dominan ese sector en varios Estados. El secretario de Transportes y Comunicaciones del Estado de Río es el general Rubens Rosado. El coronel Lima Barreto estuvo dirigiendo el SERVE (órgano de transportes colectivos) de Niterói. Pertenecía también al área militar la dirección de la Compañía de Transportes Colectivos de Guanabara donde estaba el coronel Walter Natos. Y de los transportes colectivos de Sao Paulo (CMTC). Otros militares “sirven” en puestos más modestos, pero no menos remunerados. El general Lauro Ca-

valcanti, por ejemplo, ayudado por varios oficiales superiores, es el "coordinador de taxis" de la Intendencia de Sao Paulo.

En Ceará, el secretario de Vialidad, Obras, Minas y Energía es el coronel José María Botelho. El actual director de la Fundación Centro Nacional de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo, general Moacyr Gaia, fue, en Sao Paulo, secretario del Trabajo: Designado directamente por Passarinho, el secretario de Educación del gobierno de Río Grande do Sul es el Crl. Mauro Rodriguez, ex secretario general del MEC. En Sao Paulo, la Secretaría de Educación está en manos civiles, pero el titular de la cartera tiene como jefe de gabinete al general Darcy de Siqueira Vilaca. En Río Grande do Sul, uno de los principales abastecedores de carne para el mercado brasileño, el presidente del Instituto de Carnes es el poco conocido, pero eficiente colaborador de los frigoríficos extranjeros, coronel Gastão Pereira dos Santos.

Como se percibe, los militares no tienen por qué mostrarse descontentos con las administraciones estaduales y municipales.

MILITARES DIRIGEN EMPRESAS DEL GOBIERNO

Cuando tomaron el poder en 1964, una de las primeras medidas de los militares fue liquidar el mayor número posible de empresas estatales. Transformaron a muchas de ellas en empresas de economía mixta o las vendieron. Son numerosos los militares que ocupan puestos de dirección en las empresas. Son cargos bien remunerados, donde, además de los altos salarios, los directores reciben las más variadas gratificaciones, como en las firmas privadas.

La Compañía Siderúrgica Nacional ("Volta Redonda") siempre fue dirigida por discípulos de Caxias (11). El general Macedo Soares —su primer presidente— tiene hoy como sucesor al general Alfredo Américo da Silva. El coro-

(11) Es una expresión que designa los militares de una manera en general. El Duque de Caxias, general comandante del Ejército en el tiempo del Imperio, responsable directo por el sofocamiento de varios movimientos revolucionarios populares, es considerado el patrono del ejército brasilero.

nel Penna es su director industrial. El general Edmundo Orlandini está, desde 1964, al frente de la Compañía Nacional de Alcalis. El general Antonio Alfredo Manta es el mandamás de la Red Ferroviaria Federal S. A. (RFFSA). Casi todas las empresas subordinadas a la RFFSA son dirigidas por oficiales. Las líneas ferroviarias de Sao Paulo fueron unificadas. El nuevo presidente de la FEPASA (Ferrocarriles Paulistas S. A.) es el general Raúl Pires de Castro, que declaró recientemente: "antes de seis meses, los ferroviarios paulistas no deben ni pensar en aumento salarial". ("O Estado de Sao Paulo" 4-XII-71).

En la PETROBRAS (Petróleo Brasileña) —la mayor empresa brasileña por su capital— está encaramada una chusma de militares. Su presidente es el general fascista Ernesto Geisel, hermano del actual Ministro del Ejército. Comandando los transportes de la empresa está el almirante Faria Lima. Y hasta la venta de material inservible está entregada a un oficial superior, conocido entre los trabajadores petroleros como "el general de la chatarra".

Las construcciones de carreteras —con vistas fundamentalmente a objetivos estratégicos— son, todas ellas, dirigidas por militares. También los transportes marítimos son controlados por oficiales de la Marina. En la Lóide, donde quien manda es un almirante, ocurrió un hecho inédito: fue reelecto para quedar por tres años más en el puesto de director técnico el almirante Vivaldo Cheola. En la Empresa de Reparaciones Navales Costeras están, el comandante Hélio Lapa Maranhão como presidente, y el comandante Jorge Schaefer, como director de producción. En la Compañía de Navegación del San Francisco, el capitán de mar y guerra José Alonso Sartis, sustituyó al almirante Arístides Pereira Campos Filho. La Docenave (Flota Nacional de Graneleros) tiene como director al comandante João Marcos Dias.

La Empresa Brasileña de Correos y Telecomunicaciones —el antiguo DCT (Departamento de Correos y Telégrafos)— está comandada por el coronel Haroldo Correia de Matos, que comparte la dirección con representantes de las tres ramas de las FF. AA. Allí están el comandante José Gurjão Neto, el coronel Murilo Correia de Matos, el

coronel Syla Vela, el brigadier José Carlos Teixeira Rocha y el general Lauro Stolle. No hace mucho tiempo, también la EMBRATEL (Empresa Brasileña de Telecomunicaciones) consiguió ganar su general, Francisco Augusto Gómes de Souza Galvão. La Compañía Telefónica Brasileña está presidida por el general José Siqueira de Menezes Filho. En la ELETROBRAS (Compañía ELECTRICIDAD-BRASILEÑA) está el general Amir Borges Fortes.

El Banco do Brasil también ha servido de proveedor de empleos para los militares. Nombrado por Garrastazú Médici, allá está, como titular de un consejo directivo, el desprestigiado y corrupto Perachi Barcelos, coronel de la Brigada Militar (12) y ex gobernador de Río Grande do Sul.

Así los militares van arrebatando todos los puestos que puedan rendirles más dinero. Y Garrastazú Médici todavía tiene la desfachatez de afirmar, como hizo durante las conmemoraciones de la Batalla de Monte Castelo, en 1970, que "los militares no asaltaron las instituciones, sino que las salvaron".

MILITARES EMPRESARIOS

Uno de los aspectos más reveladores de la verdadera naturaleza del régimen que impera en el Brasil es la creciente participación de militares en retiro en la dirección de empresas privadas, principalmente extranjeras. En este caso se trata visiblemente de un premio que los monopolios internacionales ofrecen a aquellos que les prestaron buenos servicios como militares o militares-políticos.

Uno de los empresarios más felices es el general Juracy Magalhães. Siempre estuvo ligado a los norteamericanos, pero, como considera que el dinero no tiene ideología, acepta cualquier moneda, ya sea marcos alemanes, dólares americanos o coronas danesas. Para él todo es dinero. Es presidente de la Ericson del Brasil, empresa que tiene grandes pedidos del gobierno en el ramo de las telecomunicaciones, donde también está "empleado" como director el mariscal Nelson de Melo. Preside también la Deltec, del

(12) Organización policial de carácter estadual, responsable por la "mantención del orden" (represión) en Río Grande do Sul.

grupo Rockefeller. Todavía como presidente comanda la "The Carlsberg Breweries and the Toborg Breweries - The United Breweries Ltd.", empresa danesa que se dedica a la producción de cerveza. En la Mercedes Benz, el general Juracy Magalhães es director, mientras que su colega Macedo Soares es el presidente. Recientemente el actual gobernador del Estado de Bahía, en una carta a los diarios, señaló: "Ericson, Petroquímica União, Sanbra, Carlsberg, Grupo Monteiro Aranha, y otros que no me acuerdo ahora, son empresas a las que está ligado el señor Juracy Magalhães y deben exigirle, si no trabajo, por lo menos presencia en la hora apropiada". (O Estado de Sao Paulo, 11-VIII-71).

El grupo "Ultra" —uno de los financistas, en Sao Paulo, de la Operación Bandeirantes (OBAN), órgano de represión política del II Ejército— tiene en su dirección, entre otros, al almirante Japiassu Guerra Brasil y al mariscal Décio Palmério Escobar.

El ex ministro de Guerra de Costa e Silva, mariscal Ademar de Queiroz, que dejó la presidencia de la PETROBRAS, pero mantiene el cargo de consejero de dicha empresa estatal, fue escogido, por "coincidencia", como agente de la "Bakol", firma norteamericana ligada al ramo petroquímico. El general Terra Ururay es el vicepresidente de la empresa Desarrollo de la Ingeniería, que detenta en el Brasil, la patente de la BAUUNION GMBH de Alemania en la producción de hormas deslizantes.

Otro caso bien típico es el del general Golbery do Couto e Silva. Golpista desde 1954, fue íntimo colaborador del mariscal Castelo Branco, para quien organizó el Servicio Nacional de Informaciones (SNI), del cual fue su primer jefe. Recibió como premio del "honrado" mariscal, el "puestito" de Ministro del Tribunal de Cuentas. Luego de ser llamado a retiro del Ejército, se jubiló también en ese cargo para asumir la presidencia del grupo americano "Dow", que, en su país de origen, está ligado al Pentágono en la fabricación de productos químicos con fines bélicos. Aquí en Brasil también el grupo "Dow" recibe buenos pedidos gubernamentales, tanto en la esfera civil de plásticos y otros, como en la investigación y producción de artículos militares, inclusive ligados a la bomba "napalm".

Los astilleros, principalmente los extranjeros situados en el Brasil, están recibiendo grandes encargos del gobierno para el recondicionamiento de la flota mercante. En casi todos, los militares están presentes. El Consorcio de Astilleros Asociados del Brasil (ESABRA) tiene como presidente al comandante Paulo Domingos Ribas Ferreira, que, hasta hace poco, presidía el VEROLME (Astilleros Reunidos del Brasil) de capital holandés. El almirante A. Cruz Santos es el vicepresidente de la Ishikawajima do Brasil, de capital japonés. La firma Sulzer do Brasil, ligada a la construcción de barcos, pues es proveedora de motores, tiene en la vicepresidencia al brigadier Almir de Souza Martins. El almirante Paulo Gouveia es el superintendente de la SUNAMAN, órgano financiador y coordinador de encargos de construcción de barcos en el ramo de la Marina Mercante.

También en el ramo aeronáutico, los militares tienen destacada presencia. La EMBRAER (Empresa Brasileña de Aeronáutica), firma controlada por el gobierno, está dirigida por el coronel Osires Silva. Esta empresa, en verdad, es mera ejecutora de planos y montaje de aviones que les provee la "Machi" italiana, cuyo representante en el Brasil es el brigadier Darío Azambuja, presidente de la ITS, creada en 1969, precisamente para cuidar de los intereses del grupo italiano.

Los generales Juscelino Camilo de Almeida y Milton de Lima Araújo, son directores de la Compañía Industrial de Rocas Betuminosas, filial de la Unión Carbide Byington Co., que procura a toda costa romper el monopolio estatal sobre el subsuelo, principalmente en la explotación del xisto betuminoso del valle de Paraíba. Aun en el ramo del petróleo, está presente el general João Batista Tubino, que consiguió el puesto de vicepresidente de la PETROMINAS, y acaba de ser electo presidente del Sindicato de las Empresas Distribuidoras de Petróleo. Es de notar que la distribución del petróleo está casi totalmente en manos de compañías extranjeras, como la Texaco, Esso, Shell y otras. El brigadier Jerónimo Bastos, que dirigió la Selección Brasileña de Fútbol en la Copa del Mundo de 1970, trabaja en la Esso Brasileña de Petróleo.

La captación y aplicación de incentivos fiscales —par-

te del impuesto a la renta que en vez de ser entregada a los tesoros públicos es dedicada a determinados tipos de inversiones— han sido una buena fuente de penetración del capital extranjero y de enriquecimiento de militares que lo manosean. Los recursos captados por militares son canalizados para el financiamiento de firmas en las cuales participan. Esto fue lo que pasó con la Safren-Teijin (Industria Brasileña de Fibras, firma japonesa ubicada en Bahia) presidida por el mariscal de aviación Henrique Fleiuss, que recibió Cr$ 2.149.393,00 de recursos oriundos de incentivos fiscales de la Texaco del Brasil S. A. - Productos de Petróleo. Por otro lado, el brigadier Affonso Celso Parreiras Horta firmó contrato con un "pool" de cinco bancos, encabezado por el Investbanco, para la captación de incentivos fiscales por valor de 32 millones de cruzeiros e instaló la FISIBRAS (Fibras Sintéticas de Bahia S. A.) de la cual es director.

Salta a la vista que los militares, que en todo momento se proclaman dispuestos a hacer los mayores sacrificios por la Patria se colocan, en realidad, como simples agentes de los grupos monopolistas extranjeros. El capital de que disponen son las relaciones de cuartel que establecieron con sus colegas de uniforme que están actualmente en los órganos gubernamentales. Desempeñan el papel de intermediarios entre los gobernantes y las empresas extranjeras, lo que les rinde jugosas comisiones. Y todos están patrióticamente satisfechos.

A pesar de controlar gran parte de la economía nacional, no hay empresas extranjeras en número suficiente para satisfacer la demanda que hay de ellas por parte de los militares. Así, algunos se contentan en "trabajar" con firmas nacionales, muchas de las cuales están también ligadas, por mil hilos, a los grupos extranjeros.

El general Afonso de Albuquerque Lima también se dedica, ahora que está retirado, a los negocios privados. Preside la Sparta, que exporta ropas hechas para los Estados Unidos, Alemania y otros países. El vicealmirante Hélio Lerencio es director de la Compañía Brasileña de Dragados, beneficiaria de grandes contratos con el gobierno para el reacondicionamiento de puertos. El general Muricí, conoci-

do "gorila", es otro empresario. Es uno de los muchos generales cuyos nombres comenzaron a aparecer con frecuencia en las columnas sociales. El general Dalisio Menna Barreto perteneció a la Rede Excelsior de Televisão. Cuando la TV Excelsior ya estaba al borde de la quiebra y precisaba mucho de los favores gubernamentales, fue a buscar al general y a los tenientes-coroneles para su dirección. La noticia decía textualmente: "El general Menna Barreto está ligado al gobierno por su actuación destacada en la revolución de marzo". Pero los canales rivales debían tener amparo gubernamental todavía mejor y la TV Excelsior, donde ocurrían tremendos escándalos financieros, acabó cerrando, dejando decenas de funcionarios sin empleo.

La especulación en la Bolsa de Valores es, hoy, moda introducida y estimulada por la dictadura. La propaganda gubernamental procura hacer creer que las especulaciones y negociados que allí se verifican —con gran participación de hombres del gobierno y militares— es indicio de prosperidad del país. De un momento a otro se puede enriquecer, afirman el ex gobernador de Bahía y el actual, explicando de esta manera el origen del "pecúnio" que poseen. La principal Bolsa de Valores, la de Río, tiene como superintendente al coronel Hugo Coelho.

Las obras públicas han sido un verdadero maná de los cielos para los militares. Cuando visitó, en 1970, un trecho en construcción de la carretera Transamazónica, en compañía del general Médici, el coronel Andreazza "se sorprendió" al encontrar en Altamira a un antiguo compañero de cuartel, el coronel de artillería Marcelo Pereira Rocha. Este caballero tan desapegado de las comodidades de los grandes centros urbanos es el director de la S. A. Paulista y de la Cristo Redentor, las cuales detentan buenos contratos en la ejecución de trabajos en la "obra del siglo" como la denominan los gobernantes. La construcción del puente Río-Niterói constituye otra fuente de lucros fáciles y negociados de los cuales se están aprovechando los militares. Los escándalos se suceden en esa obra. Ni por eso el gobierno permitió que se constituyera la Comisión Parlamentaria de Investigación para examinar el asunto. Pero fue tan grande el griterío que se resolvió "expropiar" la anti-

gua firma constructora, pagándole, con toda certeza, mucho más de lo que valían sus acciones y equipos. Esa empresa particular era dirigida por el coronel João Alberto Franco. El actual consorcio responsable de la construcción del puente es el ECEX, comandado por el también coronel João Carlos Guedes, que confesó a los periodistas recibir en la empresa 5 mil cruzeiros mensuales mientras que la mayoría de los trabajadores gana apenas 255 cruzeiros y está expuesta a los más serios "accidentes de trabajo".

El plan de construcción de casas populares —presentado por la propaganda oficial como la mayor obra de la "revolución"— no pasa de una explotación a la que están sometidos los que tuvieron ilusiones de adquirir casa propia. Pero sirvió para darles empleo a los militares que fueron encargados de llevarlo a cabo. Para el general Alfredo Bruno Gomes Martins, director industrial de la "Pedreira Cáchoeira (yacimiento de piedras), seguramente el plan gubernamental es hasta muy conveniente. Fue él uno de los signatarios del contrato con el Banco Safra de Inversiones, agente del Banco Nacional de Habitación, para abastecer de material de construcción por valor de 1,5 millones de cruzeiros.

Recientemente el Banco Nacional de Desarrollo Económico firmó contrato con la mayor industria maderera para exportación, la Madinsa S. A. —Comercio e Industria de Madera— por valor de 95 millones de cruzeiros, a título de financiamiento. Fotografiados en el acto de la firma del contrato —hecho habitual, pero de gran interés promocional de los militares-empresarios— aparecen entre otros el general João Carlos Pereira Melo, por Madinsa, y el coronel Carlos A. Alvarez, por la asesoría técnica de la Jacel Jambock.

La firma João Fortes, S. A., dirigida por un general se dedica a construcciones. Aunque su especialización es erigir edificios de lujo, está construyendo sobre el terreno de donde fueron expulsados los habitantes de las "favelas" de la Playa do Pinto en Guanabara, seis monumentales edificios de departamentos para ser vendidos exclusivamente a militares a través del Club Militar y del Club de Aeronáutica.

El general Diniz Silva fue electo recientemente para la presidencia de la Compañía Coronado de Hoteles y también ya comenzó a construir. Su obra será el Coronado Palace Hotel, en Sao Paulo, y contará con incentivos fiscales a través de la EMBRATUR (Empresa Brasileña de Turismo). Todavía en el área del turismo está presente el almirante Ari Goncalves Gomes, como director superintendente de la S. A. Turismo Santapaula Quitandinha. El general Berlio Neves continúa como presidente del Touring Club de Brasil y hace dúo con un colega de uniforme del mismo grado, que preside el Automóvil Club del Brasil.

Militares en ejercicio no pueden, por legislación, participar en actividades de dirección o representación en empresas privadas. Pero el comandante José Milicuzka, activo de la Marina de Guerra, llegó a representar, en propuesta pública de la Secretaría de Turismo de Guanabara, a las firmas Coplan y Cotebrás, que afirmó "pertenecían a su madre". E hizo esto durante más de tres años. El asunto sólo se hizo público después de las protestas de otra empresa que participaba de la misma propuesta pública, que demostró que eran de él las dos firmas. Este comandante de la Marina no fue tan "vivo" como sus colegas de uniforme que en casos similares utilizan a sus agentes.

Como la época es de negociados, nada más natural que un militar —el coronel Carlos Helvidio dos Reis— ocupe el puesto de presidente de la Confederación Brasileña de Cooperativas de Lácteos. Cabe agregar que este ciudadano, en entrevista a la prensa decía que los productores de leche —lo que debe ser entendido como las grandes compañías productoras y beneficiarias de leche, como Nestlé, Glória y otras— tenían en stock más de cuatro mil toneladas de leche en polvo que serían quemadas en el caso que el gobierno no las comprara ("Jornal do Brasil", 16-XI-70).

La larga lista de militares-empresarios comprueba que aunque no todos tengan la "suerte" de un Juracy Magalhães que tiene innumerables patrones satisfechos con su actividad, casi todos los oficiales superiores consiguen encontrar una firma donde "trabajar".

Aprovechándose de los privilegios que les otorgan las funciones que ejercen o ejercerán, los militares penetran en todos los poros de la vida nacional. El ex ministro del Ejército y ex integrante de la Junta Militar, que instituyó el AI-5, general Lyra Tavares, se convirtió en Embajador en París, además de haber conseguido elegirse para la Academia Brasileña de Letras, no se sabe bien por qué méritos literarios. Los generales H. G. Muller, de la Sociedad Brasileña de Geografía y M. A. Correa da Rocha, se convirtieron en miembros del cuerpo docente de un curso de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias y Letras Tereza Martin, en Sao Paulo. En bien de la verdad no debe olvidarse que las facultades particulares procuran colocar militares en cargos de docencia y dirección, buscando obtener buena posición junto al Gobierno.

Existen los menos felices que van a ser administradores de cementerios. Como el brigadier Haroldo Domingues, director del Servicio de Cementerios de la Secretaría de Servicios Públicos de Guanabara, es el general Durval Maciel que sólo consiguió el modesto cargo de jefe de relaciones públicas del "Jardín de la Nostalgia", cementerio particular en Vila Valqueire en Río. Pero, si los cargos son aparentemente modestos, no dejan de proporcionar lucro. Tenían conciencia de eso los referidos señores al posar para el fotógrafo en el local donde será instalado el cementerio modelo (cliché del Jornal del Brasil, 8-XI-69), en el intento no camuflado de atraer clientes.

Cosa de locos ocurrió con el coronel Gil Peixoto. Administra el manicomio de Barbacena y además es acusado de vender cadáveres, lo que por otra parte él no niega: "No se trata, bajo ningún punto de vista, de una venta ni de una transacción comercial, aunque el Hospital reciba 200 cruzeiros por cada cadáver". Preocupado con la productividad de su trabajo, aumentó el número de muertos en esa fábrica de difuntos: 120 por mes en promedio, lo que da una renta de algunos millares de cruzeiros y siempre ayuda. Ni siquiera los excepcionales (niños limitados y lisiados) escapan a la saña de los militares. Generales, almirantes, co-

roneles y otros oficiales superiores dirigen la Asociación de Padres y Amigos de los Excepcionales (APAE), donde manipulan grandes sumas.

Es un hecho conocido por muchos, que los militares no se destacan por un elevado nivel cultural. Sin embargo, ni siquiera las entidades culturales dejan de sentir el peso de la espada. Un oficial es director del Museo Histórico, en Guanabara. Otro es rector en Paraíba. La casa del Pará, y la Casa de Goiás, entidades de tipo cultural que reunen en Río de Janeiro las respectivas colonias paraense y goiana, son presididos por generales. La primera por el general Emanoel de Almeida Morais y la segunda por sus colegas Ateodolindo Borges dos Santos y Antonio Laureado de Camargo.

Los militares no resuelven ni pueden resolver los menores problemas del país. Pero la megalomanía es uno de los puntos fuertes de su personalidad. No se andan con chicas: construyen el "Brasil Grande", el "Brasil 2.000". Prometen que el país tendrá su bomba atómica. El primer paso ya fue dado con la sustitución en la presidencia del Consejo Nacional de Investigaciones, del profesor Antonio Couceiro por el general Arthur Mascaranhas Façanha. La hazaña de ese general —la Bomba Atómica— costará, según reveló el coronel Luiz Fernando Scneider, jefe de la Sección de Investigaciones del sector de física y reactores del Instituto de Energía Nuclear (Guanabara), más de un billón de cruzeiros.

El deporte también es uno de los ramos bastante cortejados por los militares. Numerosos clubes de fútbol se transformaron en rentables empresas comerciales y ofrecen posibilidades de buenas ganancias. No es por casualidad que allí están los uniformados. El brigadier Paulo Salgueiro es el superintendente del América do Rio. En el Flamengo está el coronel Francisco Guimarães Coreixas, como vicepresidente. Al tomar posesión de sus cargos, los militares llevan consigo los métodos de los cuarteles. El capitán Coutinho, como supervisor del Vasco da Gama, club carioca, prometió como primera medida para elevar la disciplina, concentrar a los jugadores en la Fortaleza de Sao João. Otro militar, un coronel, auxiliado por un capitán y

un sargento, bajo el mismo pretexto, instaló un verdadero clima de intimidación en el Corinthians paulista. El capitán Bonetti fue, no hace mucho tiempo, alejado del Palmeiras de Sao Paulo, equipo que no podía ya mantener el salario de tan "eficiente" funcionario: cinco mil cruzeiros mensuales, más premios por victorias.

Pero es en los órganos superiores de dirección del deporte que los militares prefieren apoltronarse. El brigadier Jerónimo Bastos, ya citado, es el actual dirigente del Consejo Nacional de Deportes, donde sustituyó al general Elói Menezes. Paulo Martins Meira, almirante, es presidente de la Confederación Brasileña de Básquetbol. La Confederación Brasileña de Deportes (CBD) es una excepción. A su cabeza está un civil. Por ende, el presidente "honorario" de la CBD es el general Garrastazú Médici, que "ganó" el título en la conmemoración del primer aniversario de la conquista de la Copa del Mundo. El coronel José Guilherme preside la Federación Mineira de Fútbol, mientras que su congénere del Ceará está comandada por el general Aldenor Maia, que tiene como vicepresidente a un mayor. Esas entidades, además de fuente de prestigio, manejan mucho dinero. El Comité Olímpico Brasileño, presidido por el mayor Silvio de Magalhães Padilha es un ejemplo. Recibió un millón de cruzeiros de la Lotería Deportiva para preparar la participación de Brasil en los juegos Panamericanos de Cali. Y el Ministerio de Educación se dispuso a cubrir los gastos que sobrepasaron los presupuestos concedidos.

En las escuelas y universidades, se introdujo con carácter obligatorio, la enseñanza de Educación Moral y Cívica, es decir, la justificación de la política entreguista de los militares a través de un falso nacionalismo vanidoso y de las más retrógradas concepciones. Esos cursos, que son el martirio de los estudiantes y profesores en materia de clases aburridas, son controlados por la policía política y por los servicios secretos de las FF. AA. Una amplia comisión constituida por el gobierno elabora el programa de esos cursos. Tienen destacada participación en ella el general Moacir Araújo Lópes y el almirante Ari dos Santos Rangel.

Odiados por el pueblo, los militares, estimulados por la

reacción interna y externa se aferran a la represión, único medio de prolongar sus días. Juegan también con una enorme y costosa propaganda demagógica. Todo lo que se publica hoy en el Brasil, sale directamente de la Presidencia de la República, a través de la Asesoría Especial de Relaciones Públicas, verdadero DIP (13) de la dictadura militar. Comanda ese órgano del Palácio do Planalto (sede del gobierno en Brasilia) el coronel Otavio Costa, especialista en guerra sicológica. Haciendo las imposiciones más vergonzosas, el gobierno utiliza todos los medios de comunicación de masas, especialmente la televisión, para engañar y moldear la opinión pública.

Llegan a encargar a compositores mediocres, canciones dentro de la línea de la propaganda gubernamental, pagando bien, y tratan de situar la propaganda comercial dentro de sus slogans patrioteros.

El pueblo brasileño no pierde ocasión de repudiar la intromisión de los militares en todos los aspectos de la vida nacional, a través de la creación de imágenes y anécdotas sobre los uniformados. Hasta en los diarios, cada cierto tiempo, surgen narraciones de hechos que pasan a formar parte del "folklore" popular. Sedientos de publicidad los militares no siempre perciben la sutileza de algunos redactores y en esos casos, la censura —generalmente realizada por oficiales superiores— se ve superada. Típica es la noticia del "Jornal do Brasil" (19-XII-70), informando la elección de la "personalidad deportiva del año" por el Consejo de Deportes del Museo de la Imagen y del Sonido. Ella habla por sí sola: "he aquí que los consejeros quedaron con una duda terrible. Uno quería al general Elói Menezes, otros se batían por el brigadier Jerónimo Bastos, otros preferían al mayor Ipiranga dos Guaranis, alguien recordó el nombre del capitán Coutinho y hubo hasta quien mencionara algunos grados menores. Por fin, los consejeros deben haber creído mejor simplificar las cosas y llegaron a una decisión unánime: el premio es del Presidente Médici".

(13) Departamento de Imprenta y Propaganda, órgano creado por la dictadura de Vargas para divulgar los actos oficiales del gobierno y ejercer una censura severa sobre la prensa y la radio en Brasil. Fue disuelto en 1945 con la caída de Vargas.

He aquí un pálido cuadro del patriotismo, "de la lucha contra la corrupción", "desprendimiento", de la "sinceridad", de las "altas virtudes de los militares en el poder". Ciertamente no se puede concluir que la relación esté completa. Entretanto, es posible tener una idea nítida tanto de la escalada continua de los militares en la vida del país, como de lo que realmente son. Mientras los militares puedan dar satisfacción a su voracidad, la carrera por los puestos que proporcionan ganancias, sean de la especie que sean, continuará. Cuando se trata de desfachatez, de entreguismo, de corrupción, "nadie detiene" a los militares. Teniendo al frente un general que no sólo cierra los ojos a todos los actos propios de bandoleros practicados por los hombres de uniforme, sino que participa también en ellos, la dictadura militar es la responsable directa de la entrega del Brasil al extranjero, por la corrupción que se propaga en todas las áreas, por la situación de hambre y miseria a que están relegados los brasileños.

El pueblo está cansado de la política de los generales y dice cada vez más alto: **"BASTA DE MILITARES"**, **"ABAJO LA DICTADURA"**...

———::o0o::———

Los datos arriba vertidos fueron extraídos de ediciones del "Jornal del Brasil", "O Estado de Sao Paulo", "Correio da Manhã" y otros diarios y revistas de los años 1969, 1970 y 1971.

LOS GENERALES CONTRA LOS TRABAJADORES

El pueblo brasileño se encuentra bajo el yugo de un régimen militar. Desde 1964 los generales en el poder intensifican la explotación de los trabajadores entregando las riquezas del país y las ramas fundamentales de la economía nacional a la voracidad de los trusts norteamericanos, reprimiendo cualquier protesta de las masas populares.

Procurando mantener a todo precio el poder que usurparon, los generales instalaron la dictadura más feroz que conoce la historia brasileña. Bajo el gobierno de Garrastazú Médici, se hicieron más frecuentes las prisiones, las torturas, las condenas y los asesinatos de los que se oponen al régimen. La represión es usada con fines de impedir cualquier manifestación de descontento o rebeldía, así como para amedrentar y alejar de la lucha por la independencia nacional, las libertades y otros derechos, a todos los patriotas y demócratas.

Con los mismos objetivos, la dictadura militar desencadenó una campaña de mentiras para falsear la realidad y engañar al pueblo. Propaga que todo está bien, que los trabajadores no son explotados, que ahora todo el mundo vive con la seguridad de días mejores en el futuro. Utilizando todos los medios de comunicación y publicidad lanza slogans tales como: "Estamos en Ritmo de Brasil Grande", "Nadie Detiene este País", "El Futuro Ya Llegó", típicos de la demagogia de gobiernos fascistas.

Por más que se esfuercen, sin embargo, los generales no consiguen esconder la verdad. Los hechos hablan por sí mismos y tienen más fuerza que cualquier propaganda. En

este folleto, basados en datos concretos, denunciamos la terrible e insoportable realidad vivida por la clase obrera brasileña, después del golpe militar reaccionario de 1964.

UN GOBIERNO ANTIOBRERO

Por varios motivos, los trabajadores se transformaron en uno de los blancos principales de los militares que asaltaron el gobierno del país. Es que, a pesar de alimentar toda especie de ilusiones reformistas, pacifistas y otras, el movimiento de los obreros crecía en los años anteriores a 1964. Esto se traducía en el aumento del número de sindicatos y de sindicalizados, en el sentido de ciertas reivindicaciones, en el espíritu combativo de algunas huelgas y manifestaciones. Entre amplios sectores de la clase obrera crecía el afán de liberarse de toda la forma de explotación y opresión a que están sometidos los trabajadores.

Ante algunas conquistas del proletariado y de la ampliación de sus luchas por alcanzar nuevos derechos, las fuerzas reaccionarias se sintieron amenazadas y se alarmaron. Los trabajadores fueron acusados por ellas de ser los responsables por la inflación reinante en el país y por el alza del costo de la vida. En torno a esta acusación absurda, los reaccionarios promovieron una enorme alaraca. La usaron como uno de los pretextos para el golpe de abril bajo la justificación de que el desarrollo económico nacional exigía que no hubiese aumentos del salario real para la clase obrera que ya ganaba demasiado. Y así por el estilo.

Por eso, los generales lanzaron una brutal ofensiva para liquidar las conquistas de los obreros y para destruir o contener su movimiento ascendente. De hecho ningún aspecto de la actividad de los trabajadores, ninguno de sus derechos dejó de ser pisoteado. Aun derechos consagrados hace mucho tiempo fueron abolidos. Dejaron de existir las precarias libertades sindicales. Las persecuciones a los obreros más activos en las fábricas y sindicatos se transformaron en norma. Se institucionalizó el "arrocho salarial" ("compresión salarial", conjunto de leyes y medidas destinadas a reducir los salarios de los trabajadores). Y el problema social, en nombre de la pretendida seguridad na-

cional, volvió a ser asunto de la policía. El proletariado brasileño pasó a vivir sus días más difíciles.

Enumeremos sumariamente las medidas de los generales contra los obreros.

En mayo de 1964, fue dictada la ley 4.330 que extinguió en la práctica el derecho de huelga, bajo el alegato de la necesidad de "reglamentarlo". La reglamentación establece que, para decretar una huelga, la asamblea del sindicato tiene que contar con la presencia de dos tercios de los asociados. Bien, cualquiera sabe que, debido a horarios de trabajo diferentes, dificultades con el transporte, etc., es casi imposible reunir el número de asociados exigidos por esa ley. Además de esto, la reglamentación determina que la asamblea del sindicato, aparte de conseguir el número fijado de asociados para declarar la huelga, debe dar un plazo de diez días a los patrones o patrón, antes de iniciarla. Y la reglamentación prosigue obligando a las asamblea de los asociados a contar con la participación de representantes del Ministerio de Trabajo, prohibiendo la huelga de solidaridad, exigiendo que las secciones principales de las fábricas sigan funcionando, prohibiendo la exhibición de carteles considerados ofensivos al gobierno y a los patrones. Finalmente, la ley no permite que los funcionarios públicos se declaren en huelga.

Así, el derecho de huelga fue abolido por la dictadura. Cabe señalar que, cumplidas todas esas exigencias, si los trabajadores se declaran en huelga, los patrones y el gobierno podrán reclamar "dissidios colectivos" (procedimiento jurídico existente en el Brasil donde se da intervención a la Justicia del Trabajo para solucionar los conflictos planteados entre obreros y patrones). Y después de la decisión tomada por la Justicia del Trabajo, a favor o en contra de los trabajadores, la huelga se hace ilegal. Las penas previstas en caso de violación de la ley son las de prisión, cancelamiento del registro del sindicato, exclusión del sindicato de su entidad de clase y expulsión del territorio nacional si se trata de un extranjero.

Aceptando esa ley infame, jamás los trabajadores podrán luchar por sus reivindicaciones. Para realizar sus luchas, precisan pasar por encima de ella, preparar y declarar la

huelga, apoyándose en su unidad de acción y en su organización en las empresas.

Otra importante conquista liquidada por la dictadura militar fue la de la estabilidad en el empleo después de diez años de servicio. En su lugar, surgió la Ley de Garantía por Tiempo de Servicio. Actualmente, todo empleado admitido en la vigencia de esta ley, o los antiguos que optaron por ella, pueden ser despedidos en cualquier momento por los patrones, independientemente de sus años de trabajo. Consecuencia directa de esta situación, es que son cada vez más raros los obreros antiguos en el empleo. Un estudio del Departamento Nacional de Mano de Obra, del Ministerio del Trabajo, analizando 51 actividades económicas en el Estado de Sao Paulo (2.080.183 trabajadores regidos por la CLT —Consolidación de la Legislación del Trabajo— en 1969), concluyó que apenas el 8,9% eran estables y que el 91,1% no estables. Cerca del 40% tenían menos de un año de trabajo en la misma empresa. Hoy le es prácticamente imposible a una persona con más de 35 años de edad conseguir empleo, lo que eleva de sobremanera el contingente de los cesantes.

La dictadura, con la unificación de los Institutos de la Previsión Social en un único órgano, el INPS (Instituto Nacional de Previsión Social), no sólo estableció el control absoluto sobre la previsión, sino que abolió la representación paritaria en su dirección. Disponiendo de colosales capitales obtenidos con las contribuciones de los trabajadores, el INPS se fue transformando en una agencia de empleos por cuña de los protegidos de la dictadura, en un antro de escandalosos negociados, realizados a costa de la disminución de los servicios médicos y asistenciales de los contribuyentes.

Bajo la dictadura militar, todos los obreros, empleados y funcionarios sufrieron de la abolición de varios otros de sus derechos.

Así, por ejemplo, los ferroviarios fueron duramente perjudicados. La ley 4.345 suprimió el pago de las bonificaciones de insalubridad, de trabajo peligroso y riesgo de vida, fijadas, cada una, en 20% sobre el salario. El personal de oficina vio aumentada su jornada de trabajo de 6 a 8 ho-

ras diarias, sin ninguna compensación. Esa ley suprimió también la licencia de premios por antigüedad. A través del decreto Nº 5, las esposas de los ferroviarios regidos por la Consolidación de Las Leyes del Trabajo, fueron excluidas de la asignación familiar. En abril de 1965, la dictadura suprimió las vacaciones de 30 días, reduciéndolas a quince días.

Los obreros marítimos también fueron seriamente golpeados. Fue anulado el decreto Nº 51 668/63 que establecía los escalafones salariales. Con la ley 4.345/64, los militares eliminaron la etapa mensual, cortaron la bonificación de insalubridad, correspondiente a 30% del sueldo base, y redujeron la remuneración por trabajo extra de 100% a 20% en las empresas estatales de la marina mercante. Echaron por tierra la paridad entre los marítimos del sector privado y los de las empresas estatales. Finalmente, por medio del decreto Nº 22/66, liquidaron el derecho de sindicalización de los marítimos de las empresas estatales.

La dictadura se volvió igualmente contra los portuarios. Revocó los acuerdos salariales que regían desde 1963, en los cuales estaban incluidas una serie de conquistas de los trabajadores. Con la ley 4.345/64, se redujo el salario de los portuarios hasta en un 30% y se rebajó arbitrariamente el nivel de clasificación de muchos trabajadores de esa categoría, que pasaron del nivel 15 a los niveles 8 y 9. Las bonificaciones por insalubridad, trabajos realizados bajo la lluvia y por servicios extraordinarios fueron revocadas. Fue anulado el adicional del 35% sobre el salario pagando a los portuarios que operan en los parques de minería y en cámaras frigoríficas. El decreto Nº 3 permite a la administración anular la matrícula de todo trabajador de los muelles o del mar que, según su arbitrio, ejerza "actividad contraria a los intereses nacionales".

Otros sectores profesionales también se vieron perseguidos por los generales. A través de simples despachos ministeriales, del 15-VI-65, la dictadura suspendió la vigencia de numerosos acuerdos firmados entre bancarios y banqueros que establecían el pago de un abono a partir de marzo de 1965. En ese mismo año, por medio de otro decreto, fue suspendida la ejecución del acuerdo firmado por los

aeroviarios y aeronautas con los respectivos patrones, acuerdo que ya había sido aprobado por la Justicia del Trabajo, vetando, así, cualquier aumento salarial que sobrepase el nivel fijado por el gobierno.

En cuanto a los funcionarios públicos, su situación bajo la dictadura no es mejor. La primera medida de los generales fue suspender el pago del 13º salario a los funcionarios estatales. A través de Actos Institucionales, los gobernantes abolieron las garantías de estabilidad, vitalicidad e inamovilidad, conquistas consagradas hace decenas de años. Los funcionarios públicos pueden ser despedidos, colocados a disposición, jubilados o transferidos, bastando que "demuestren incompatibilidad con los objetivos de la Revolución", es decir, que no se inclinen ante los dueños del poder.

Los obreros, con la ley Nº 4.923, sufrieron un golpe más. Según esta ley, los empresarios, invocando dificultades, pueden reducir el número de días de trabajo por semana y descontar por esa reducción hasta un 25% del valor del salario. Tienen esa facultad por tres meses, prorrogables por otro período igual en cada año (artículo 2 de la referida ley). De este modo, fueron oficializados el desempleo parcial y la reducción "legal" de los salarios.

"ARROCHO SALARIAL"

Una de las medidas más odiosas de los generales fue la implantación del Arrocho Salarial (Compresión Salarial). Bajo los rótulos de "combate a la inflación" y "equilibrio económico", la dictadura viene aplicando una política de explotación imperiosa a las masas trabajadoras a través de una drástica desvalorización del salario real de los trabajadores, de la fijación de topes máximos para los aumentos de salarios y de la elevación de todos los impuestos, tasas y multas que pesan sobre el pueblo. El llamado "ahorro interno" no es otra cosa que el empobrecimiento constante de los que viven de sus salarios. Estos son reajustados siempre a niveles bastante inferiores a los índices de aumento del costo de la vida. Sobre las espaldas de los trabajadores recae todo el peso del pseudocombate a la

inflación, mientras que las ganancias de los capitalistas brasileños y de los imperialistas crecen vertiginosamente.

A través de la ley 4.735, la dictadura limitó los poderes de la Justicia del Trabajo para decidir sobre los "dissidios colectivos", poniendo fin a toda posibilidad de acuerdo directo entre obreros y patrones. Antes del golpe militar, los obreros con sus luchas, muchas veces conseguían aumentos de salarios que aminoraban las consecuencias de la carestía, de la inflación, etc. Ahora, los índices de aumentos son fijados por el gobierno, siempre bastante inferiores a los índices de alza del costo de la vida y de la inflación.

La única y simple competencia de la Justicia del Trabajo es confirmar la decisión gubernamental. Aun cuando los patrones y empleados lleguen a un acuerdo para un aumento sobre la base de un índice más elevado que el establecido por el gobierno, éste no permite su vigencia y determina que la Justicia del Trabajo lo reduzca al tope establecido oficialmente. Y los niveles fijados por la dictadura jamás sobrepasaron el 24%, porcentaje que está muy por debajo del alza anual de los precios en lo que se refiere a alimentos, vestuario, arriendos, transporte, remedios, etc. Los marítimos y portuarios no tienen derecho a ningún aumento del salario siempre que las empresas en que trabajan se declaren en régimen deficitario (artículo 5 de la ley 4.735).

El salario mínimo también está subordinado a la ley del Arrocho Salarial. Los trabajadores ven bajar el valor real de los salarios verticalmente. Basta analizar que, mientras que el salario mínimo, de 1964 a 1970, aumentó en 370%, el costo de la vida según datos oficiales se elevó en un 860% en ese período, más del doble del salario mínimo. Hoy, los obreros ganando 3,7 veces más, nominalmente, no pueden comprar ni la mitad de lo que adquirían en 1964.

A comienzos del año 1971, la dictadura, haciendo gran alarde, aumentó el salario mínimo. Este, en Río y en San Pablo pasó a ser de 226 cruzeiros. Según datos del Departamento Intersindical de Estadísticas y Estudios Socio-Económicos del Estado de San Pablo, el salario mínimo de un trabajador casado con dos hijos menores, residentes en San Pablo o en Río, debería ser, ya en febrero de 1970, 750 cru-

zeiros, cerca de 4 veces más que el actual. Aún más: de acuerdo con la fijación de gastos específicos previstos por el decreto-ley 399/38 que estableció el salario mínimo, hoy en día, apenas para el consumo mínimo con alimentación el trabajador necesitaría de 265 cruzeiros y 11 centavos. Si a esta necesidad se le agregan los gastos de transporte, vestuario, remedios, educación, etc., se tendrá el cuadro de la situación de un trabajador con 225 cruzeiros mensuales. Y eso que no fue computado aquí el alquiler de una casa, calculado oficialmente en 305,14 cruzeiros por mes en ciudades como Río de Janeiro, Sao Paulo y otras. Un documento del Departamento Intersindical analiza: "En relación al mínimo vigente en 1964, actualmente el poder adquisitivo sufrió una baja del orden del 63,4%. Mientras que el salario real en aquella fecha tenía, comparativamente, un poder adquisitivo de Cr$5,90, el actual tenía en febrero de este año (1971), un poder adquisitivo del orden de Cr$2,16". La situación de los trabajadores es más grave aún si se tiene en cuenta que cerca de un tercio de los censados en septiembre de 1970 percibía menos de Cr$100 mensuales por su actividad productiva. El doce por ciento percibían entre Cr$100 y Cr$150 y apenas un quince por ciento tenían salarios entre Cr$150 y Cr$200.

La carestía de la vida redujo cada vez más el poder adquisitivo de los trabajadores. El propio gobierno admitió que, en 1971, el costo de la vida se elevó más que en 1970. En Sao Paulo por ejemplo, fue del 20,6% contra el 17,45% en 1971 y 1970, respectivamente. Se elevaron los precios de los productos alimenticios en un 101% en el último año. Por los aumentos ya verificados hasta ahora, 1972 batirá todos los records en la elevación de la carestía de la vida. En Porto Alegre, sólo en enero del año en curso ella alcanzó el 4,9%.

El trabajador tiene que trabajar cada vez más para comprar cada vez menos. Basta analizar que, en 1940, una persona que percibía el salario mínimo precisaba trabajar 1 hora 20 minutos para comprar un kilo de arroz. En 1971 precisaba de cerca de 2 horas y media. Consecuencia de la reducción del poder adquisitivo del pueblo es la baja en el consumo de productos alimenticios. En relación a 1970, el

año pasado el consumo interno de café se redujo en 787 mil sacos. También decayó, entre otros productos, el consumo de arroz, carne, leche, porotos.

SE INTENSIFICA LA EXPLOTACION Y AUMENTA LA MISERIA DE LA CLASE OBRERA

La política económico-financiera del gobierno, al servicio de los grandes capitalistas, de los latifundistas, y de los monopolios extranjeros, sobre todo norteamericanos, sólo trae hambre y miseria a los hogares de los trabajadores. Para aumentar sus lucros, esa minoría de privilegiados recurre a todos los medios posibles para intensificar la explotación de la clase obrera. Apoyada por la dictadura, prorroga las jornadas de trabajo a través de horas extraordinarias, que los obreros son obligados a hacer en virtud de sus menguados salarios. Aumenta el ritmo de producción y la intensidad del trabajo, estableciendo nuevas y más altas normas de producción. Recurre al engañador "sistema de trabajos a trato". Reduce las horas destinadas a las colaciones cuando no las extingue totalmente, como acontece con los trabajadores de la CTC de Guanabara. Utiliza cada vez más el trabajo de la mujer y de los niños. En Guanabara y en el Estado de Río, de 2.895.434 personas que trabajan, 745.740 son mujeres, de las cuales 368 mil obedecen a un régimen de trabajo nunca inferior a 40/49 horas semanales, ganando como máximo, un 65% de los salarios percibidos por los hombres en tareas semejantes. Los menores de edad, igualmente, son sumamente explotados, percibiendo salarios bien inferiores a los de los adultos a pesar de que ejecutan, en la mayoría de los casos, un trabajo igual. La conquista del salario igual para trabajo igual, fijada en la Constitución de 1946, fue liquidada por la Carta otorgada por los militares en 1967. La ley 5.274/67 estableció la distinción entre menor aprendiz y menor no-aprendiz. Estos pueden trabajar a partir de los 12 años, y hasta los 14 no tienen salario establecido; deben recibir 50% del salario mínimo regional de los 14 a los 16 años, y 75% de los 16 a los 18. El menor aprendiz (edad entre 14 y 18 años) debe recibir el 50% del salario mínimo regional y, sólo después de com-

pletado el aprendizaje, que dura de uno a tres años, recibirá el salario integral.

Como consecuencia de la intensificación de la explotación de los trabajadores y de las inadecuadas condiciones de seguridad, aumenta terriblemente el número de accidentados o de afectados por enfermedades profesionales. Según datos oficiales, en Río, ocurren, como promedio, 456 accidentes de trabajo por día, de los cuales 45 son casos graves. En 1969, hubo más de un millón de accidentes de trabajo en todo el país, mientras que en Inglaterra, con un número mucho mayor de obreros, en ese mismo año ocurrieron poco más de 320.000 accidentes. En 1970, según cálculos de INPS, el número de accidentados en el trabajo llegó a la cifra de un millón 300 mil. En el primer semestre de 1971, según calcula el INPS, pasó de 1,5 millón el número de accidentes. Más de dos mil trabajadores fueron víctimas de accidentes fatales. Un número superior a cuarenta mil trabajadores sufrieron lesiones de tal gravedad que quedaron incapacitados para ejercer sus profesiones. Señalando que para 1972 el número de accidentes llegaría a cifras elevadísimas, el INPS asegura que se prevé "un aumento de 'apenas' el 10%"... En una pesquisa parcial hecha por el SESI (Servicio Social de la Industria) de Sao Paulo, inspeccionando 2.137 industrias con un total de 72.782 empleados, se constató que un 20% de los trabajadores estaban expuestos a sustancias potencialmente capaces de provocar enfermedades profesionales. Ese porcentaje se eleva al 50% en el sector de alimentación. Las enfermedades profesionales más comunes son la intoxicación provocada por el plomo, dermatitis, intoxicación por agentes químicos, etc.

En virtud de la política antiobrera de la dictadura, la vida de los trabajadores se tornó insoportable en todos los terrenos. Empeoraron las condiciones de vivienda de los que viven de su trabajo. La falta de casas y los alquileres prohibitivos constituyen uno de los problemas más serios que afectan la vida de los trabajadores. El Brasil presenta un déficit de más de 7 millones de casas y los alquileres suben más de un 20% de año en año. Gran parte de la población trabajadora no puede residir en casas o departamentos. Viven en las favelas, mocambos, malocas (poblaciones callam-

pas) en condiciones subhumanas en lo que se refiere al confort, higiene y servicio sanitario. En Guanabara, la población de las favelas representa casi un cuarto de los habitantes, esto es, más de 1 millón de personas. Este cuadro, guardadas las proporciones y teniendo en cuenta pequeñas diferencias, es el mismo que presentan las grandes ciudades del Brasil.

Los gobiernos militares no solucionaron la crisis habitacional. Al contrario. La promulgación de la ley 4.380/64, que liberó los alquileres, y el llamado Plan Nacional de Vivienda, no obstante la pompa demagógica de que se revistiera, lejos de resolver el problema o siquiera encaminar su solución, hicieron más difícil la situación de los que necesitan casas. Los trabajadores son removidos a la fuerza de las "favelas" para los cubículos (mini-casitas) de los "Conjuntos Residenciales" del Banco Nacional de Habitación, situados siempre en la periferia de las ciudades, distantes de los lugares de trabajo, lo que significa altos gastos de transporte para los allí residentes. Además, los trabajadores no pueden pagar los préstamos de las nuevas viviendas sujetas al inicuo sistema de elevados intereses y de reajuste monetario. Incluso para aquellos que pagan regularmente los préstamos, después de varios años la deuda es aún mayor de cuando adquirieron el inmueble.

En cuanto a la salud, bajo la dictadura los trabajadores están cada vez peor. Cincuenta y tres millones de brasileños están infectados de lombrices. La tuberculosis, que venía disminuyendo, ganó nuevo impulso en los últimos años. Solamente en la zona cañera de Pernambuco, hay 24 mil personas tuberculosas, según datos de la Sociedad Hospitalaria de los Trabajadores del Azúcar. Incluso en centros desarrollados como São Paulo, de acuerdo con datos de la Secretaría de la Salud, crece el número de tuberculosos, principalmente entre los niños. Más del 20% de los alumnos que frecuentan escuelas públicas sufren de ese mal. El Brasil detenta un triste liderazgo en el cuadro mundial de la mortalidad infantil. Ella corresponde al 55% de las muertes ocurridas en el país, y de cada mil niños que nacen vivos, 112 mueren luego del primer año de vida. El hambre es la principal causa de esas muertes. La situación de mi-

seria del pueblo es tal que incluso en Guanabara, el Estado de más alta renta per cápita del país, el 76% de la población vive en régimen de subalimentación y de carencia general. En la capital de Sao Paulo, de 100 niños que mueren antes de completar cuatro años de vida, 30 fallecen por carencia alimenticia, llegando a 49 muertos de cada 100 en el litoral del Estado de Sao Paulo. La sífilis y otras enfermedades segan millares y millares de vidas anualmente.

A pesar de toda la propaganda del gobierno sobre el "desarrollo", aumenta aceleradamente el desempleo. Anualmente, cerca de 2 millones de jóvenes en edad de incorporarse a la producción no encuentran trabajo. En el norte y en el nordeste, se cuenta por millones el número de desempleados. E incluso en centros industriales como Río y Sao Paulo, el contingente de desempleados crece constantemente. Y cada vez es más reñida la disputa por un empleo. Recientemente, 70 mil candidatos concurrieron a 1.400 vacantes en la Caja Económica Federal. En numerosos Estados, gran parte de la población, principalmente del interior y de los pequeños centros urbanos, es obligada a llevar una vida casi nómade, a vagar de un lado para otro, en busca de un empleo que no encuentra. En 1968, 1.179.000 habitantes del Estado de Minas Gerais (el 10% de su población), se desplazaron dentro de su propio Estado en busca de trabajo. En Belo Horizonte (capital de Minas Gerais) hay más de cien mil desocupados. Una encuesta realizada en Sao Paulo en 1970, reveló que 4.498.000 personas se encontraban "fuera de la estructura ocupacional", esto es, desocupados. Datos del censo de 1970 registraron la existencia de una creciente despoblación en la zona agraria de Sao Paulo. Esta población en constante migración para los grandes centros, va a engrosar el ejército de desempleados de las grandes ciudades, aumentando la mano de obra barata que posibilita a los patrones rebajar el salario de los obreros. Proporcionalmente al número de desempleados, aumenta el número de marginales y prostitutas. En Sao Paulo, más de 300 mil muchachas, de edad entre 15 y 25 años, son obligadas a vivir en la prostitución. En Río, hay más de 20 mil. Y se cuentan en millares las que llevan tal vida en ciudades como Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, y en

otras capitales. Un reportaje publicado en la revista "Veja" reveló que sólo en Guanabara hay 15 mil mendigos inscritos.

FABULOSOS LUCROS PARA LOS EXPLOTADORES

Mientras que la vida de los trabajadores se va volvien-
do insoportable, los tiburones nacionales y extranjeros
siguen acumular fabulosas fortunas. La dictadura militar con-
da a esos explotadores toda suerte de ventajas fiscales,
exenciones de impuestos y otras facilidades, lo que aumenta
sobremanera sus ganancias. Los incentivos fiscales (parte
del impuesto de renta que el gobierno deja de recoger y
entrega a los explotadores), es una de las formas más di-
fundidas y utilizadas para favorecer a los capitalistas y la-
tifundistas. Sólo en el año 1971 la **SUDENE** (Superinten-
dencia de Desarrollo del Nordeste) aprobó 108 proyectos
agropecuarios y 52 industriales con el valor global de Cr$2,6
billones. Desde su instalación, esta institución ya proporcio-
nó a los empresarios más de 14,6 billones de cruzeiros. Por
su lado la **SUDAM** (Superintendencia de Desarrollo de Ama-
zonia), en apenas cinco años de actividad, entregó más de
Cr$4 billones, como incentivos fiscales. Los latifundistas del
nordeste tuvieron enormes ventajas con la última sequía:
recibieron millones de cruzeiros en créditos y aun vieron
valorizadas sus propiedades con las obras realizadas por el
gobierno. Además éste les va a dar algunos billones más por
cuenta del llamado **PROTERRA**. Los cafecultores también
son generosamente beneficiados por el actual gobierno.
Además de haber permitido éste el aumento fabuloso en el
precio del café, los productores tendrán ahora más de Cr$ 4,2
billones de cruzeiros para la "recuperación" del cultivo de
café. Los intereses de los financiamientos serán bajos y si
se tratara de préstamos para la adquisición de insecticidas
y máquinas pulverizadoras, ni siquiera pagarán intereses.
Las ganancias crecen incesantemente. Los Bancos de Inver-
sión, por ejemplo, estrechamente ligados a la política de los
incentivos fiscales, obtienen enormes ganancias. El lucro
medio en el año 1971 fue del 73% sobre el capital, habiendo
organizaciones que alcanzaron el 100% y hasta el 200% en
apenas 12 meses de actividades. De modo general, los ban-

queros nada tienen que reclamar a la dictadura. Las ganancias del Banco Halles de Investimentos, por ejemplo, se elevaron a un 176% de 1970 a 1971. En ese mismo período, el CREFISUL aumentó sus ganancias de 23,2 millones a 40 millones de cruzeiros; el BRADESCO, sólo en el año que terminó, obtuvo ganancias superiores a 70 millones de cruzeiros, mientras el ANDRADE ARNAUD tuvo una ganancia disponible de Cr$21,5 millones, después de descontar las gratificaciones, remuneraciones y donaciones. Su capital: Cr$30,2 millones. La siderurgia, fuertemente controlada por el capital extranjero, disfruta de grandes privilegios. Incluso ahora el gobierno consiguió centenares de millones de dólares de préstamos en el exterior para aplicarlos en ella. El Plan Siderúrgico Nacional sólo ha traído más lucros a los capitalistas. La Belgo Mineira, por ejemplo, obtuvo en el primer semestre del año pasado, un lucro casi idéntico al obtenido durante todo el año 1970. La SAMITRE, empresa subsidiaria de la primera, ganó Cr$34,3 millones para un capital de poco más de Cr$40 millones. La Mannesman, deficitaria en 1970, obtuvo en el año siguiente una ganancia líquida de Cr$46.400.000,00, mientras que la ICOMI, subsidiaria de un gran trust yanqui, tuvo una ganancia equivalente a un tercio de su capital. Para un capital de Cr$1 millón 103.000,00 la Compañía Vale do Río Doce, principal exportadora de minerales de hierro, obtuvo en 1971 una ganancia de Cr$428.100.000,00.

Grandes beneficiarios de la situación actual son las firmas constructoras. Tienen grandes contratos con el gobierno y elevan enormemente sus capitales y sus ganancias. La constructora Mendes Junior por ejemplo, que acapara grandes contratos en la Transamazónica (carretera) y otras obras del gobierno, duplicó sus ganancias en 1971 en relación al año anterior. Sus directores preven para 1972 un movimiento excepcional de dinero, ya que la empresa firmó contratos por un monto de Cr$ 1,5 billón. La constructora Adolfo Lindenberg, con un capital de Cr$20 millones obtuvo en 1971 una ganancia de Cr$12 millones, el 60% sobre el capital. La dirección de Ingeniería Rossi calcula conseguir en el año en curso, sólo con las obras del Banco Nacional de Habitación, una ganancia igual a la de todas sus ope-

raciones del año pasado, que fue del 60% sobre el capital. Mueblerías Lafer verá sus ganancias subir verticalmente con el contrato hecho con la CTB (Compañía de Teléfonos) para fabricar cabinas telefónicas para Río y Sao Paulo. Valor del contrato: Cr$2,5 millones. Y, así, todas las firmas constructoras van lucrando, mientras sus obras se desmoronan, causando la muerte de decenas de personas.

En varias ramas de la economía se destacan las grandes firmas, sobre todo las extranjeras. La Cia. Industrial Agropecuaria consiguió en 1970 un lucro superior a Cr$7 millones y muchos, muchos millones obtuvieron los dueños de los ingenios azucareros. La Souza Cruz es conocida como una de las empresas más rentables del país. La CICA, del ramo de la alimentación conservera, elevó de un año para otros en 50% sus ganancias, mientras que la empresa propietaria del Azúcar Uniao, obtuvo Cr$27,5 millones en el último balance contra 12,4 y 10,1 millones de cruzeiros en los años anteriores. Las "Casas de Banha" en 1970 obtuvieron un lucro de 38,8% sobre su capital, y el año pasado aumentó sus ganancias. Los laboratorios, en su aplastante mayoría extranjeros, están contentísimos con sus lucros y hacen planes para elevarlos aún más en 1972. Y la fábrica de juguetes "Estrella" apenas en un año elevó sus ganancias en un 62%.

El rendimiento medio de las grandes empresas sobrepasó lejos el 25% sobre el capital, habiendo empresarios que duplicaron y hasta triplicaron sus ganancias sólo en 12 meses.

El "desarrollo" económico tan pregonado por la dictadura es en la realidad, el desarrollo de los lucros fabulosos que obtienen los capitalistas extranjeros que dominan el 70,2% de la industria; 58,3% del comercio; 67,6% del transporte. Para garantizar su propia propaganda y la del gobierno que tanto las beneficia, controlan el 69,2% de la prensa.

La política de los generales contribuye para concentrar cada vez más la riqueza creada por las masas trabajadoras en las manos de una minoría explotadora. El lujo que ostentan los "ricachones" contrasta violentamente con la miseria del pueblo. Las orgías de gastos, en las fiestas carna-

valescas de los grandes clubes, son un verdadero escarnio para el hambre de los trabajadores. En una sola noche en el teatro Municipal de Rio de Janeiro, los alegres participantes consumieron, además de 1.200 kilos de pavo, 60 cajas de whisky escocés, 120 de whisky nacional y mucha champaña francesa, según lo informaron los diarios.

LA DICTADURA COMBINA LA REPRESION CON LA DEMAGOGIA

La orientación antipopular y antiobrera de la dictadura viene acarreando inmenso descontento entre amplios sectores de los trabajadores. Temerosos de que este descontento se transforme en poderosas luchas, los militares intensifican la represión contra el pueblo. Reprimen con violencia cualquier movimiento reivindicativo. Mantienen a los sindicatos bajo rígido control del Ministerio del Trabajo y de la policía. Liquidaron cualquier vestigio de libertad sindical. La huelga, incluso por las reivindicaciones inmediatas más simples, es considerada crimen contra la seguridad nacional. El obrero que impulsa en sus sindicatos la lucha por sus derechos, corre el riesgo de castigos y lo mínimo que le puede pasar es la expulsión sumaria del empleo. Innumerables obreros se encuentran en las cárceles por el crimen de luchar por sus derechos. Otros pagaron con la vida el haber osado oponerse a la política de hambre de la dictadura.

Al mismo tiempo que reprime a los trabajadores, el gobierno militar realiza una intensa campaña demagógica tratando de engañar a las masas populares. Las llamadas "medidas de impacto", tan enaltecidas por Médici y sus portavoces, tienen como fin engañar a la opinión pública con medidas de fachada que en nada benefician a los trabajadores.

Con gran estruendo, la dictadura lanzó el Plan de Integración Social. Se lo presentó como medida destinada a formar un fondo para cada trabajador. En la realidad ese plan es una farsa. Cálculos hechos por la asesoría económica de diversos sindicatos revelaron que un trabajador que percibe el salario mínimo, conseguirá de acuerdo con ese plan, acumular en su "cuenta bancaria" la "fabulosa" cantidad de 2 cruzeiros por mes (cerca de E° 20)... El propio

gobierno preve que, en el año 1976, cada obrero podrá tener depositada "a su nombre", la suma de 50 cruzeiros. El fondo creado por el PIS, depositado en los bancos, sólo ha beneficiado, hasta ahora, a los empresarios. Diversas empresas, sobre todo extranjeras, han obtenido grandes préstamos bancarios retirados de este fondo.

Habiendo fracasado vergonzosamente el Plan Nacional de Salud, que entregaba a la iniciativa privada la asistencia médica de los trabajadores, la dictadura procura, ahora, transferir tal asistencia del INPS para los sindicatos. Promete préstamos a los obreros a través de los sindicatos e incluso, habla en crear un "Banco Nacional Obrero". Es un esfuerzo más de los generales para desviar a los sindicatos de sus verdaderos objetivos, transformándolos en órganos de lucha reivindicativa, en órganos de asistencia social, en clubes de recreación, etc. Y va más allá aún. La dictadura pretende transformar a los sindicatos en órganos de usura, que cobrarán intereses exorbitantes sobre los préstamos que son concedidos a sus asociados. El general Médici anunció, con gran propaganda, la creación de la Central de Medicamentos (CEME). Tal institución dirigida por militares, tendría la finalidad de vender remedios más baratos al pueblo. Es una medida demagógica más de los generales. En vez de nacionalizar los laboratorios extranjeros que monopolizan el mercado y el 90% de la fabricación de remedios, la dictadura se propone comprar a estos laboratorios sus productos y revendérselos a los trabajadores. Eso sólo hará aumentar las ganancias de los fabricantes, a costa de los trabajadores. De ahí el entusiasmo con que el presidente del sindicato de la industria farmacéutica aplaudió la medida gubernamental.

Los trabajadores del campo también son blanco de la demagogia del gobierno. Los generales, al crear la llamada Previsión Social Rural, pretenden establecer un fondo de Cr$1,2 billones por año, cantidad a ser obtenida a través de la contribución del 2% sobre los productos rurales en especies y de una contribución del 2,6% de los registros de pago salarial de los patrones.

Las contribuciones fijadas significan un nuevo impuesto que recaerá sobre el consumidor. La llamada Previsión

Social Rural es una ofensa al trabajador del campo. En primer lugar, actualmente, es generalizado el desempleo en el campo y es sabido que, en el interior, los hacendados no utilizan registros de pagos salariales. En segundo lugar, ¿qué significa, si se llega a conceder una jubilación a los 65 años de edad, cuando es evidente que, en la miseria en que viven, raros son los asalariados agrícolas que llegan a esa edad?, y los que consiguen llegar a los 65 años, ¿qué harán con el 50% del salario mínimo establecido en el decreto gubernamental, como tope jubilatorio?, ¿qué hará una viuda con el 30% del salario mínimo? Si la Previsión Social Rural es pura demagogia para los trabajadores, no lo es para los patrones. El fondo rural al ser creado, podrá ser utilizado como capital de giro por los empresarios del campo para obtener préstamos, de la misma manera que ocurre con el PIS.

Además de esto, el destino de la Previsión Social Rural será igual al de las leyes que establecen el salario mínimo, vacaciones, reposo semanal remunerado, contrato de trabajo legalizado para los trabajadores del campo, leyes que jamás fueron aplicadas. Tendrá el mismo destino del Estatuto de la Tierra, dictado por la dictadura militar, que tampoco es aplicado en la parte que se refiere a las ventajas para el hombre del campo.

Esta es la realidad vivida por los trabajadores y el resto de todo el pueblo, bajo el actual gobierno. Es una situación impuesta por él, por arbitrariedad de las fuerzas armadas y el terror policial. Está manchada por el dolor y por la sangre de los torturados y asesinados en las mazmorras de la dictadura. No puede ser aceptada por los explotados y oprimidos. Es preciso transformarla.

Sólo la lucha puede transformar esa realidad. Sólo con la lucha será posible reconquistar los derechos que la dictadura suprimió, liberar a los sindicatos de la tutela del gobierno y expulsar a los amarillos, poner fin al "arrocho salarial", conseguir el aumento efectivo de los salarios y vencimientos, así como la rebaja del costo de la vida. En defensa de sus reivindicaciones y derechos, los trabajadores tendrán que recorrer el camino de la huelga y de las más diversas formas de acción. Deberán multiplicar esas accio-

nes hasta convertirlas en un poderoso movimiento de resistencia a la política antinacional y antiobrera de la dictadura. Cada fábrica o local de trabajo, cada barrio o lugar de vivienda, cada sindicato o asociación, se deberán transformar en un centro de organización, de lucha y de unidad.

Al prepararse en todos los terrenos para enfrentar y derribar a la tiranía de los generales fascistas, los obreros precisan forjar una sólida alianza con los hombres del campo y otras capas y elementos progresistas de la población con el fin de liquidar la humillante y terrible situación que se creó en el Brasil. Son cada día más favorables las condiciones para efectuar esa gran unidad. Al efectuarla, el pueblo brasileño podrá liberar a su país de la dictadura militar y del yugo del imperialismo norteamericano, conquistar un gobierno popular revolucionario e instaurar un nuevo régimen, que asegure la democracia e independencia nacional.

Ni la represión terrorista ni la demagogia de los militares en el poder podrá impedir que la clase obrera ocupe sus puestos de combate y de dirigente de la lucha de todo el pueblo brasileño. Ella sabrá cumplir, hasta el fin, su gloriosa misión emancipadora.

Marzo de 1972.

LOS MILITARES EN EL PODER y **LOS GENERALES CONTRA LOS TRABAJADORES** son dos importantes documentos para todos aquellos que se interesan por lo que ocurre en el Brasil de hoy, bajo la más cruel e inhumana dictadura militar de toda su historia.

Se trata de dos publicaciones objetivas, basadas en datos oficiales y que reflejan la verdadera fisonomía del régimen instaurado en Brasil a partir de 1964. Echa por tierra toda propaganda falsa y demagógica que, pagada en oro, el gobierno brasileño busca difundir en el exterior.

El ponderado combate a la corrupción no es nada más que una burla para encubrir toda la dilapidación que los generales y demás compinches de uniforme realizan en las arcas fiscales y los grandes negociados patrocinados por ellos. El tan alabado desarrollo brasileño significa una explotación brutal de la clase obrera y de los campesinos y demás trabajadores del país.

Estos documentos sirven como material de consulta permanente, pues se refieren a hechos o circunstancias, sino que son la expresión de lo que es el Brasil de los militares.

Publicación de
CHILE NOTICIAS LTDA.
Amunátegui 75 - Of. 7.
Colección CUADERNOS BRASILEÑOS